

SENTENCIA N° 528 /18

Expte. N° 214/926/2018

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los ⁰⁴ días del mes de Octubre de 2018, se reúnen los Señores miembros del **TRIBUNAL FISCAL DE APELACION DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN**, Dr. Jorge Esteban Posse Ponessa (Vocal Presidente), C.P.N. Jorge Gustavo Jiménez (Vocal), y Dr. José Alberto León (Vocal) para tratar el expediente caratulado como **“LAS LANZAS S.R.L.” SI/ RECURSO DE APELACIÓN**, Expediente N° 214/926/2018 (Expte DGR N° 158/271/A/2017) y;

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de estudio y votación, dio como resultado: CPN Jorge Gustavo Jiménez.-

El CPN. Jorge Gustavo Jiménez dijo:

I.- Previo al tratamiento de la cuestión particular que nos ocupa, y atento la vigencia de Ley Nro. 9013 (B.O. 24.05.2017), entiendo que resulta necesario precisar, algunas aclaraciones referidas al procedimiento a imprimir a la presente causa y que refieren específicamente a aquellas providencias contempladas en el punto IV, art. 10, incisos 4° y 8° del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de Apelación (R.P.T.F.A.).-

El plexo normativo aplicable primigeniamente al procedimiento por ante el Tribunal Fiscal de Apelación lo constituye el Código Tributario Provincial. Sin perjuicio de ello y conforme el art. 129° del Digesto citado, a falta de norma expresa, se aplicarán las disposiciones generales del procedimiento administrativo y, en su defecto, las de los Códigos de Procedimientos Civil o Penal.-

Como punto de partida debe señalarse que la ley N° 4.537, consagra en su art. 3° los principios generales sobre los cuales se asienta el procedimiento administrativo, destacándose, entre ellos, la búsqueda de la verdad material, el

San Martín 362, 3° Piso, Block 2

Expte. 214-926-2018
San Miguel de Tucumán

Tel. 0381-4979459 Página 1 de 8

C.P.N. JORGE GUSTAVO JIMÉNEZ
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

impulso de oficio, el informalismo a favor del administrado, el debido proceso legal, la celeridad, economía y eficacia en el trámite administrativo.-

Respecto de los últimos (celeridad, economía, eficacia), ellos también son principios receptados por el Código Procesal Civil de la Provincia, concretamente por el art. 30º en tanto prescribe que los jueces tendrán los poderes necesarios para realizar todos los actos tendientes a obtener la mayor celeridad y economía en su desarrollo.-

En atención a la normativa citada, de plena aplicación a este procedimiento, puedo sostener que en el caso concreto la previsión contemplada en el art. 10 incs. 4º y 8º del R.P.T.F.A. produce una colisión con los principios reseñados precedentemente, atento al modo en que entiendo debe resolverse la cuestión traída a estudio.-

En efecto, la declaración de la cuestión como "de puro derecho" y el llamamiento de autos para sentencia, tiende a la protección de los derechos del contribuyente, o si se quiere, a darle la posibilidad de controvertir las mismas en un caso o de ampliar sus fundamentos en otro, dentro de los plazos generados a partir de la notificación personal. Se respeta de ese modo derechos constitucionalmente reconocidos.-

En esa inteligencia, las notificaciones personales aludidas garantizan el pleno y efectivo ejercicio del derecho de defensa y de la seguridad jurídica.-

Eisner lo dice más claramente al afirmar que: "La parte que confió en el texto de la ley para ordenar su actividad en el proceso se hallaría sorprendida y vulnerada en su derecho de defensa si por causa de una decisión judicial -de borroso origen pretoriano- se le privara de alguna facultad o recurso con evidente menoscabo del principio de seguridad jurídica" (Eisner, Isidoro, "Las notificaciones judiciales en el debido proceso -a propósito de cierta jurisprudencia-", -LL-1981-D-948).-

Paralelamente se inscribe el principio del informalismo que imbuye al derecho administrativo y que exige la combinación de éste con la forma. Se trata de una ratio decidendi fácilmente comprensible, por ser expresión de la idea misma que

JORGE E. POSSE DI NESSA
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

JOSE ALBERTO LEON
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

G.P.N. HORÉ GUSTAVO JIMENEZ
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

impregna al formalismo en el derecho, cuyo espíritu está presidido por la intuición de que -al decir de Ihering- tras su aparente contradicción, existe una mutua y recíproca interdependencia entre las formas y la libertad; y es que, para glosar el pensamiento de aquél autor, cabe recordar que: "Enemiga jurada de lo arbitrario, la forma es hermana gemela de la libertad. Las formas fijas son la escuela de la disciplina y el orden, y por consiguiente de la libertad: son un baluarte contra los ataques exteriores: podrán romperse, pero no plegarse. El pueblo que profesa verdadero culto a la libertad comprende instintivamente el valor de la forma y siente que ella no es un yugo exterior, sino el vigía de su libertad" (Ihering, Rudolf von, El espíritu del derecho romano, Libro II, Ira parte, Tít. III, § 50).-

Como corolario de lo expuesto, y en atención al modo en que entiendo debe resolverse el caso -en sentido claramente favorable al contribuyente- las prerrogativas acordadas a partir de la previsión de notificar personalmente las providencias mencionadas, colisionarían en su perjuicio y del Tribunal mismo, con principios fundamentales del procedimiento administrativo como la celeridad, la economía procesal y la eficacia. Ello debido a que, de cumplirse con las formas previstas en la Reglamentación (notificación personal de las providencias mencionadas), ello redundaría en un desgaste jurisdiccional innecesario y consecuentemente, en una dilación superflua del trámite sin que exista perjuicio actual para el recurrente que lo justifique. En otras palabras, la cuestión puede resolverse mediante el dictado de una sola Resolución por aplicación del principio de la economía y celeridad antes dicho.-

El dictado del Acto Administrativo definitivo que se pretende en este proceso significa un transcurrir, a veces largo de tiempo, en el que las partes y el Estado, necesariamente, deben realizar un esfuerzo, un gasto, inclusive económico. Con la vigencia del principio de economía procesal se pretende evitar esa pérdida. Para COUTURE es menester recordar que el tiempo en el proceso más que oro, es Justicia, por ello es un derecho de la persona obtener una decisión jurisdiccional del conflicto en un plazo razonable. Entre los medios para combatir la lentitud procesal se debe propender a la economía de esfuerzos y gastos, constituyendo muestras del principio de economía procesal: el impulso de oficio y la notificación automática como regla general en materia de notificaciones.

Dr. JORGE E. POSSE JONES
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JOSE ALBERTO LEON
V.C.C.
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

El mecanismo que propongo adoptar en el presente caso, tiene como principal objetivo y fundamento imprimir celeridad al proceso, procurando una pronta y eficaz respuesta administrativa, ante el incesante reclamo de la sociedad en tal sentido. La modalidad reducida excepcional de este procedimiento no tiene como objetivo la renuncia a los principios y garantías del debido proceso, sino reordenar los desajustes existentes entre la colisión de aquellos principios a favor del administrado, que nos proporciona la realidad empírica.

En mérito a ello, y atendiendo a que los tiempos modernos se inclinan hacia un procedimiento ágil donde los principios de inmediatez, celeridad y economía procesal encuentren una clara respuesta, corresponde SOLO como excepción en el presente caso y en virtud de la Ley 9013, prescindir de las formas establecidas en el art. 10, incs. 4º y 8º del R.P.T.F.A. y dictar Resolución de fondo sobre la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal.

Así lo propongo.

II.- Sentada la posición precedente me abocaré al análisis de las constancias de la causa.

Surge que a fojas 18/22 del expediente N° 158/271/A/2017, el Dr. EDUARDO SIXTO MARTINEZ FOLQUER, abogado de la firma LAS LANZAS S.A., CUIT N° 30-63922112-8 interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° MA 68/18 de la Dirección General de Rentas de fecha 15/01/2018 obrante a fs. 16. En ella se resuelve APLICAR una sanción pecuniaria de multa por \$ 19.800 (Pesos diecinueve mil ochocientos), equivalente al triple del Impuesto a los Automotores y Rodados correspondiente al periodo fiscal 2017 por encuadrar su conducta con las disposiciones del artículo 292 del Código Tributario Provincial.-

El apelante denuncia no haber sido notificado del sumario abierto en contra de su cliente, tomando conocimiento recién con la notificación de la resolución sancionatoria.

Que la resolución pretende afirmar la existencia de un domicilio real respecto de una sociedad comercial cuando el concepto de domicilio real remite al lugar físico



Dr. JORGE E. POSSE DONESSA
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION



Dr. JOSE ALBERTO LEON
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

de residencia y que éste refiere necesariamente a una persona "física", nunca a una persona jurídica.

Se remite al art. 152 del Código Civil y Comercial el cual establece que el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar, al igual que el art. 11 inc. 2 de la Ley 19550.

Esta imposibilidad de atribuir a una persona jurídica un domicilio real, se encuentra en el art. 37 del CTP, puesto que el mismo presume que el domicilio de las personas jurídicas es: a) el lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva, o el lugar donde se desarrollan sus actividades, o donde se encuentren situados sus bienes o fuentes de rentas.

Que como surge del estatuto de LAS LANZAS S.A., su domicilio legal se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde también se realizan todas las asambleas de directorio puesto que el art. 233 de la Ley 19.550 determina que el lugar de reunión de las asambleas de accionistas es el de la sede o lugar que se determine, siempre dentro de la jurisdicción del domicilio social.

Que la Resolución realiza una interpretación del art. 37 del Código Tributario opuesta a la contenida en el Código de fondo (Ley 19.550), ya que ésta establece que el Directorio de una sociedad anónima al igual que las asambleas, debe reunirse en el domicilio fiscal, Buenos Aires en este caso, mientras que la Resolución pretende otorgar mayor importancia al domicilio fiscal que al lugar donde se decide la vida del ente societario.

Respecto al lugar donde el rodado circula efectivamente, sostiene que al hallarse el vehículo radicado en la provincia de Catamarca, por encontrarse afectado a la actividad que desarrolla también en la provincia de Tucumán, solo corresponde el pago del tributo en aquella jurisdicción donde se encuentra radicado.

Que la provincia de Tucumán no puede dictar ningún tipo de norma cuyo alcance exceda el ámbito territorial de la propia provincia.

Agrega que en razón de que algunos de los inmuebles se encuentran en la provincia de Tucumán, ha patentado los rodados destinados a dichos inmuebles en esta provincia, demostrando claramente que cuando los rodados son destinados a los inmuebles ubicados en esta provincia, los patenta en esta provincia, y viceversa,

San Martín 362, 3º Piso, Block 2

Expte. 214-926-2018
San Miguel de Tucumán

Tel. 0381-4979459 Página 5 de 8

C.P.N. JORGE GUSTAVO VIMENEZ
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE PONESSA
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JOSE ALBERTO LEON
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Que el vehículo patente OLV 184 por el cual se impone la multa, radicado en la provincia de Catamarca no tiene deuda impositiva alguna, ya que la firma ha abonado todos los tributos correspondientes.

III.- Que a fojas 35/37 del expediente N° 158/271/A/2017, la Dirección General de Rentas, a través de sus apoderados, contesta traslado del recurso interpuesto por el contribuyente, conforme lo establecido en el artículo 148° del Código Tributario Provincial; el que se da por reproducido en honor a la brevedad administrativa.

IV.- Que encontrándose cumplidos los requisitos de admisibilidad del Recurso de Apelación de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 134° inciso 2) del C.T.P., entiendo que la presente cuestión es de puro derecho. Por lo que corresponde el tratamiento del recurso sometido a debate, con el objeto de resolver si la Resolución N° MA 68/18 resulta ajustada a derecho.

V.- A la luz de las normas vigentes, se advierte que el presente caso encuadra en las en las previsiones contenidas en el artículo 7, 9° párrafo de la Ley N° 8.873 restablecida en su vigencia por Ley N° 9013 (B.O. 24/05/17) que expresa: *"...Quedan liberadas de sanción las infracciones previstas en la Ley N° 5121 (t.c. 2009) y sus modificatorias, cometidas hasta el 31 de Mayo de 2015 inclusive y eximidas de oficio las sanciones no cumplidas por dichas infracciones..."*.

Las constancias de autos corroboran la declarada aplicación al caso de la precitada norma, en la medida que la infracción objeto del presente recurso, data de fecha 28/11/2014 ya que esta es la fecha en la cual se procedió a la inscripción del Automotor dominio OLV 184 en el Registro del Automotor de la Provincia de Catamarca y la misma es anterior al 31/05/2015.

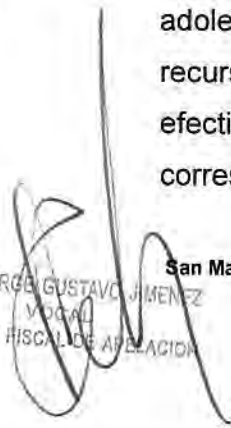
Siendo ello así, concluyo que se ha tornado abstracto emitir pronunciamiento por carecer de interés jurídico actual la pretensión recursiva en examen y, por ende, adolece de sentido emitir opinión respecto de los agravios contenidos en aquel recurso. Es que, si ministerio legis, se ha eliminado la posibilidad jurídica de hacer efectiva la determinación de la D.G.R., resulta de toda evidencia que no corresponde a este Tribunal Fiscal de Apelación abrir juicio respecto de los



Dr. JORGE E. POSSE POMARES
VOCAJE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION



Dr. JOSE ALBERTO LEON
VOCAJE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION



C.P.N. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
VOCAJE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

agravios traídos a su conocimiento, tornándose abstracta la cuestión planteada y, por consiguiente, resultar inoficioso emitir opinión en el tópic, en atención a lo precedentemente considerado.

Por lo expresado y teniendo en cuenta los beneficios de las normas citadas, corresponde 1) DECLARAR ABSTRACTA, la cuestión planteada por el contribuyente LAS LANZAS S.A., CUIT N° 30-63922112-8, en su recurso de apelación y; 2) DECLARAR que como consecuencia que la Ley N° 9013 restableció la vigencia de la Ley N° 8873, por aplicación del artículo 1° inciso 6) apartado c) de la primera de las normas citadas, la sanción determinada mediante Resolución N° MA 68/18 de fecha 15/01/2018, ha quedado sin efecto en virtud de la eximición de oficio dispuesta por la normativa citada precedentemente.

Así voto.-

El señor vocal **Dr. Jorge Esteban Posse Ponessa**, dijo: Compartiendo los fundamentos expuestos por el señor vocal, Dr. Jorge Gustavo Jiménez, vota en igual sentido.

El **Dr. José Alberto León** dijo:

Que comparte el voto emitido por el C.P.N. Jorge Gustavo Jiménez.

En mérito a ello,

**EL TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
RESUELVE:**

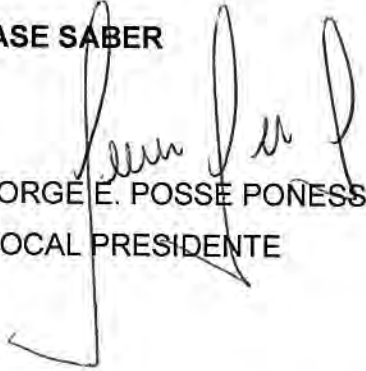
- 1. TENER** por presentado en tiempo y en forma el Recurso de Apelación interpuesto y por contestado los agravios por la Autoridad de Aplicación.-
- 2. DECLARAR** como excepción en el presente caso, por aplicación de los principios de economía, celeridad e inmediatez procesal, y en virtud de la vigencia de la ley Nro. 9013 (B.O. 24.05.2017), la prescindencia de las formas establecidas en el art. 10, incs. 4° y 8° del R.P.T.F.A.-

3. DECLARAR ABSTRACTA, la cuestión planteada por **LAS LANZAS S.A.**, **CUIT N° 30-63922112-8**, en su Recurso de Apelación, en merito a lo considerado. Y declarar que como consecuencia que la Ley N° 9013 restableció la vigencia de la Ley N° 8.873, por aplicación del artículo 1° inciso 6) apartado c) de la primera de las normas citadas, la sanción determinada mediante Resolución N° MA 68/18 de fecha 15/01/2018, ha quedado sin efecto en virtud de la eximición de oficio dispuesta por la normativa citada precedentemente.-


4. REGISTRESE, notifíquese, oportunamente, devuélvase los antecedentes administrativos acompañados y **ARCHÍVESE**.-

M.S.P.

HAGASE SABER


DR. JORGÉ E. POSSE PONESSA
VOCAL PRESIDENTE


C.P.N. JORGE G. JIMENEZ
VOCAL


DR. JOSÉ ALBERTO LEÓN
VOCAL

ANTE MI


Dr. JAVIER CRISTOBAL AMUCHASTEGUI
PROSECRETARIO
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

DRA. SILVIA M. MENEGHELLO
SECRETARIA